

Boletín Informativo

Programa Conjunto de Seguridad Humana Alto Wangki Bocay

2da edición: Mayo, 2015





Foto: Claudia Bernheim/OIM. Arlen Dixon, recibió una máquina de coser además de otros materiales de costura, con los que emprenderá un nuevo negocio en su comunidad.

Familias emprenden negocios en el Alto Wangki Bocay

47 familias (alrededor de 235 personas) de diferentes comunidades indígenas del Alto Wangki Bocay, fueron beneficiadas por el Programa Conjunto de Seguridad Humana (PCSH), con la entrega de materiales para la construcción de negocios familiares.

A través del componente de Seguridad Económica del PCSH, el Gobierno Territorial Indígena (GTI) con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entregaron los insumos para negocios familiares, con el objetivo de proporcionar oportunidades que generen ingresos y capacidades, que contribuyan a la independencia económica y sostenibilidad de las comunidades.

Las familias beneficiadas previamente habían diseñado sus planes de negocios, a partir de las capacitaciones relativas al emprendimiento, desarrollo y manejo de negocios comunitarios, realizadas en octubre del año pasado en la comunidad de Walakitang.

Para Arlen Dixon, beneficiaria del PCSH en la comunidad de Yakalpanani, la entrega de una máquina de coser junto con las demás herramientas y materiales para la apertura de su sastrería, es apenas el inicio de su negocio.

“Con todos estos materiales, nosotros como familia, mis hijos y esposo vamos a salir adelante. Con el dinero que obtenga de la costura, tengo que hacer que el negocio crezca, porque todo lo que nos han enseñado en las capacitaciones, lo hemos aprendido para el bien de la familia y la comunidad”, expresó Arlen al recibir el equipo para su sastrería.

Al igual que Arlen y su familia, otras 46 familias beneficiarias del PCSH lograron convertir sus respectivos planes de negocios en realidad. Pulperías, farmacias, panaderías, comedores, entre otros, son algunas de las nuevas actividades comerciales que se inauguraron en los tres territorios del Alto Wangki Bocay: Mayangna Sauni Bu, MiskituTasbaika Kum y Kipla Sait Tasbaika.



Foto: Claudia Bernheim/OIM. Familias de la comunidad de Yakalpanani del territorio MiskituTasbaika Kum reciben materiales para la construcción de sus negocios.



Foto: Manuel Bucardo/UNFPA. Celia Leman, lideresa comunitaria y policía voluntaria de Amak, capital del territorio Mayangna Sauni Bu.

Celia Leman y su lucha contra la violencia

Su cara cansada y su mirada penetrante nos revelan su valentía y carácter. Ese mismo carácter que la llevó a ser elegida como Policia Voluntaria de la comunidad mayangna de Amak en 2006. Celia Leman Hodsong nació una mañana de julio de 1960 y desde su elección como Policia Voluntaria se encarga de colaborar en el proceso de establecimiento de la justicia, en compañía de wihtas, ancianos y demás actores de su comunidad. A sus 54 años Celia también es madre de cuatro hijos, una mujer y 3 varones.

Su niñez fue dura. Criada por una tía y su padre, no logró asistir a la escuela porque en ese momento no había acceso. Sin embargo, eso no evitó que participara activamente en las actividades comunales.

Para Celia, la violencia intrafamiliar y el maltrato hacia la niñez está presente a lo largo de la historia de las comunidades indígenas. “El patriarcado inculcado a los hombres en su crecimiento ha hecho que la mujer sea vista con inferioridad y nos hace pensar que lo que dice el hombre se debe respetar y cumplir”, asegura.

“La violencia genera inestabilidad en una familia, sufrimiento en los niños y daños irreparables en la vida de la mujer”, afirma Celia. Además agrega que “la forma de resolver los casos de violencia intrafamiliar es a través de la mediación en conjunto con la policía”. “Se invita a las partes afectadas y junto al wihta se firma un acuerdo que es de obligatorio cumplimiento por parte del victimario”, afirmó, “sin embargo, a pesar de que existe esta instancia, a veces la mujer calla por miedo a más violencia”, aseguró.

Con el apoyo del Programa Conjunto de Seguridad Humana, así como de otras policías voluntarias, wihtas y demás miembros de la comunidad, Celia asegura que ha logrado fortalecer sus conocimientos para la prevención de la violencia de género en el Alto Wangki Bocay.

“La situación va cambiando a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar por el apoyo de organismos que capacitan a las mujeres para que conozcan sus derechos”, aseguró Celia. El Programa Conjunto de Seguridad Humana trabaja por la promoción de los derechos de la mujer en base a la ley 779, “Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres”, en conjunto con los wihtas y policías voluntarios de las comunidades del Alto Wangki Bocay. “Gracias al apoyo de los programas que intervienen, las mujeres ahora conocen más sus derechos, toman espacios de participación en temas de relevancia, son beneficiarias directas de los proyectos y forman parte activa de las decisiones comunitarias”, afirma Celia.

Felipe Cruz, trabajando por la justicia en el Alto Wangki Bocay

En 1976, cuando terminaba de cursar el 6to grado de primaria, Felipe Cruz Álvarez ya había acumulado bastante experiencia en el trabajo en el campo. “En mi mente tengo las cosas buenas y malas que he visto”, entona con voz pausada, “desde mi infancia he trabajado en el campo produciendo arroz, frijoles, bananos, plátanos y otros tubérculos, para el consumo de mi familia”. Nació y vive en la comunidad de Lakusta, sobre el río Lakus, que en parte de su recorrido sirve como frontera natural entre el departamento de Jinotega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, en Nicaragua.

Durante la época de la dictadura somocista, Don Felipe recuerda haber presenciado diversos episodios de violencia en contra de su comunidad. “Solo un guardia dominaba la zona”, rememora, “impresionaba, amenazaba de muerte, echaba preso a los jóvenes por puro gusto y nos quitaba nuestros animales, gallinas, cerdos y vacas”. “Además, obligaba a las muchachas a acostarse con él”, recuerda con tristeza.

Luego, “en los años 80, Nicaragua entró en un conflicto que involucró a los pueblos indígenas y nuestra gente tuvo que huir a los campos de refugio en Honduras”, asegura. Don Felipe cuenta como, los miembros de la Resistencia y del Ejército de Nicaragua los trataban con desprecio y humillación. “No nos podían entender porque no hablaban nuestra lengua, entonces nos agredían por no manejar el español”, afirma.

“En 1990 regresamos a nuestra amada tierra, en la comunidad de Raití”, recuerda Don Felipe. “Cuando regresamos, notamos la necesidad de apoyar a nuestras comunidades para la defensa de nuestros derechos y el establecimiento de la justicia”, rememora.

En aquel momento, la comunidad de Raití necesitaba organizarse mejor. Por esta razón, desde aquel año existe un Juez Comunal (wihta), que trabaja para que exista paz en las comunidades. Don Felipe Cruz fue elegido por la comunidad para ejercer este cargo desde ese momento, ya siendo reconocido por sus valores, representando muy bien el sentir y el vivir de los pueblos indígenas.

Las circunstancias nacionales habían cambiado pero las demandas comunitarias en temas de justicia seguían siendo las mismas: atención de los casos que surgen dentro de la comunidad y velar por una resolución eficaz de los conflictos.

“Siempre hago invitación a los ancianos de la comunidades, pastores, coordinador, para ver cómo podemos aplicar la justicia conforme a los hechos o actos cometidos”, afirma Don Felipe al describir el proceso de aplicación participativa de la justicia indígena. “Logramos acuerdos, levantamos un acta y la firma de ambas parte, el demandante y el demandado”, describe.

La Justicia Indígena busca la solución pacífica de los conflictos a través de un proceso de análisis y dictamen participativo que involucra a distintos líderes y lideresas de

las comunidades.

“Ahora se demanda una mayor conexión y trabajo conjunto entre el modelo de justicia indígena y el de la justicia nacional, para resolver los casos más graves que afectan a la comunidad”, cuenta Don Felipe. “Cuando suceden delitos graves y nos damos cuenta que no podemos implementar nuestro modelo de justicia, pedimos apoyo a las autoridades nacionales, policía, juez del municipio”, agrega, “sabemos que es imposible resolver problemas de siglos en 10 años, pero es necesario ir trabajando para que exista un buen sistema de justicia en las comunidades, buscando paz y armonía”.

El Programa Conjunto de Seguridad Humana, a través de su componente de Seguridad Jurídica, trabaja en el análisis del modelo de implementación de la justicia indígena, con el fin de crear documentos y guías formales que les sirvan de herramientas a los wihntas y demás actores comunitarios para realizar sus labores en este rubro. Así mismo, se trabaja para establecer lazos que permitan un mayor acercamiento entre las instituciones del estado que trabajan en temas relacionados a la justicia, con las instituciones ancestrales indígenas.

“Yo estoy muy alegre con el Programa Conjunto de Seguridad Humana”, afirma Don Felipe. “La vez pasada vinieron representantes de la Corte Suprema de Justicia y hablaron muchas cosas interesantes sobre la justicia en nuestra comunidades y eso nos anima bastante”, señala Don Felipe. “Necesitamos más acciones para reforzar la justicia comunitaria, para poder llegar a todas las comunidades de la Región”, concluyó Don Felipe.



Foto: Juan José López / UNFPA. Felipe Cruz, wihnta de Lakus Ta, en Kipla Sait Tasbalka.

Comunidades del Alto Wangki Bocay mejoran su disponibilidad y acceso a alimentos



Foto: M. Cruz/FAO. Poblador del Alto Wangki Bocay muestra su cosecha de frijoles.

La Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe y el Gobierno Territorial Indígena del Alto Wangki Bocay están revitalizando los sistemas tradicionales de producción comunitaria con los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna, lo que ha permitido mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos, mejorando los niveles de nutrición de forma directa e indirecta a más de 7 mil personas en 14 comunidades. Esta revitalización de los sistemas tradicionales de producción ha logrado aumentar significativamente la producción en esas comunidades, pasando de producir 5,542 quintales de frijol en apante de 2012-2013, a 7,847 en 2014. Así mismo, la producción de arroz en la cosecha de primera en 2013 pasó de 24,647 quintales a 31,000 en 2014.

Así mismo, para lograr una dieta más balanceada y completa la SDCC ha entregado 273 paquetes avícolas (10 gallinas y 1 gallo). Las familias participantes hoy en día complementan su alimentación con al menos mil huevos diarios que son consumidos en un 60% y el resto lo venden a la misma comunidad para la compra de otros productos básicos de uso familiar. También promueven la instalación de huertos familiares que durante el año 2014 produjeron: 10 quintales de tomate, 0.5 quintales de cebolla, 653 unidades de sandía, 554 docenas de pepino, 2000 unidades de ayote, 2400 unidades de pipián. Esta producción alcanzada ha permitido asegurar la disponibilidad y el acceso estable de alimentos a la población de las 14 comunidades en las que se ejecuta el Programa Conjunto de Seguridad Humana.

El presidente del Miskitu Indian Tasbaika Kum, Ervin Martínez, expresó que “en los años anteriores los comerciantes llevaban a vender hasta 200 quintales semanales y se terminaban casi de inmediato, este año no ha habido escasez y hay mucho arroz y maíz”.

Estos logros se deben al respeto, valoración y fortalecimiento de la organización ancestral comunitaria de los pueblos indígenas, que ha mejorado mediante los ban-

cos Indígenas de semillas, la autogestión de la seguridad y soberanía alimentaria, así como la promoción de la responsabilidad individual y colectiva a lo interno de las comunidades.

Cabe destacar que el esfuerzo de las familias y sus dirigentes, ha permitido mejorar la economía familiar y comunitaria. Además, se ha mejorado la infraestructura post cosecha para almacenar semilla y granos permitiendo así asegurar la alimentación tanto en tiempos normales y como en épocas de crisis.

Producto de todo el esfuerzo, las comunidades han instalado 14 Bancos de semillas que cuentan con centros de acopio y almacenamiento de semillas (bodegas) con un área total de 910 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 4,770 quintales de granos.

Los costos de la construcción fueron asumidos en conjunto: el 65% por el Gobierno y el 35% por la comunidad. Además de almacenar semillas, el local sirve para realizar reuniones, capacitaciones y otras actividades comunitarias.



Foto: M. Cruz/FAO. Con los bancos de semillas también se ha fortalecido el rol de las mujeres del Alto Wangki Bocay en los procesos de producción agrícola en las comunidades.



El Programa Conjunto de Seguridad Humana del
Alto Wangki Bocay es financiado por el
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS).